

**No. 14668. Multilateral**

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)\*

**Ecuador**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 3 November 2022*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 November 2022*

*\*No UNTS volume number has yet been determined for this record.*

**N° 14668. Multilatéral**

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4\*

**Équateur**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 3 novembre 2022*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 3 novembre 2022*

*\*Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier.*

Nota No. 4-2-137-2022

La Misión de Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas saluda atentamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Oficina de Asuntos Jurídicos- y tienen a bien informar acerca de la expedición del Decreto Ejecutivo Nro. 588 de 1 de noviembre de 2022, cuyo texto se adjunta en calidad de anexo y mediante el cual el Presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, declara *“el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas y Esmeraldas”*.

Esta declaratoria se da con motivo de las actividades de grupos de delincuencia organizada, cuyas acciones, amenazas y prácticas delictivas se evidenciaron, con mayor violencia, durante la madrugada del 1 de noviembre de 2022, sucesos cuyo escalonamiento pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de las fuerzas del orden, su integridad y su vida.

La declaratoria se circunscribe al espacio territorial antes señalado por ser el lugar en donde han sucedido los hechos y en el que el conflicto entre grupos y facciones delincuenciales deriva en actos violentos que atentan contra los derechos del resto de la población, de los miembros de las fuerzas del orden y de los mismos participantes de los referidos enfrentamientos. Además por ser el espacio territorial donde ante la intervención estratégica del Estado, los grupos y facciones delincuenciales han reaccionado de manera violenta y desproporcionada.

La situación antes descrita requiere una intervención emergente y urgente de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social.

De conformidad con el artículo 6, se suspende *“en el espacio territorial delimitado por [el referido] Decreto Ejecutivo, el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación a los motivos del estado de excepción, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales. La suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión de las personas, consiste en limitar la propagación de acciones violentas tales como las que dieron lugar al Estado de Excepción. En tal sentido, la fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana”*.

De igual manera, el artículo 7 suspende *“el derecho a la inviolabilidad de domicilio en el espacio territorial delimitado por el Decreto Ejecutivo. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la posibilidad de realizar inspecciones y requisas por la fuerza pública, tendientes al hallazgo de espacios de almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización, armas y explosivos, a fin de desarticular amenazas en curso o futuras. Esta medida excepcional es necesaria para prevenir posibles atentados y actos violentos derivados del enfrentamiento entre grupos delincuenciales organizados”*.

El artículo 8 suspende “*el derecho a la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida en el espacio territorial delimitado por el Decreto Ejecutivo. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia estará limitada a la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el cometimiento u ocultamiento de algún ilícito relacionado con los sucesos que dan lugar a esta declaratoria, en particular relacionados a posibles atentados que pongan en riesgo la integridad y vida de los ciudadanos*”.

De acuerdo con el artículo 10, “*se restringe la libertad de tránsito a partir de la expedición del Decreto Ejecutivo. Los horarios de restricción serán todos los días desde las 21h00 hasta las 05h00 en el espacio territorial delimitado por el Decreto Ejecutivo. Las personas que circulen durante el horario del toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente. Sin perjuicio de lo expuesto, se exceptúa de la restricción aquí establecida a los siguientes sectores:*

1. *Servicios de salud de la red de salud pública integral y de la red privada complementaria;*
2. *Seguridad y fuerza pública, seguridad privada complementaria y los servicios de gestión de riesgos y atención de emergencias;*
3. *Servicios de emergencia vial;*
4. *Los servidores públicos de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y cuerpo diplomático acreditado en el país;*
5. *Los servidores públicos o personal de contratistas de entidades públicas que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de los servicios públicos;*
6. *Personas que formen parte de una cadena logística, incluido el sector exportador, quienes deberán demostrar que pertenecen a una empresa cuyo giro ordinario de negocio requiere el transporte de carga y, de ser el caso, la licitud de la carga que transportan; de igual manera, empresas cuyas plantas o facilidades de producción operen durante la noche o en turnos rotativos y sus empleados, debiendo acreditar tal calidad con el carné o identificación de su empleador;*
7. *Personas que deban trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados dentro del horario del toque de queda;*
8. *Abogados, siempre que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial, funcionarios de la Corte Constitucional y, servidores públicos de la Función Judicial;*
9. *Trabajadores de medios de comunicación social;*
10. *Trabajadores de los sectores estratégicos y servicios públicos definidos como tales en la Constitución, que son: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones (como servicio público), vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley;*

*Personas que en el ejercicio de sus actividades económicas abastezcan una cadena productiva. Para el efecto el Ministerio de Gobierno podrá emitir las disposiciones pertinentes. El*

*Ministerio de Gobierno podrá autorizar la realización de actividades tales como eventos públicos, actividades turísticas y similares en lugares donde no exista riesgo de violencia, previa evaluación de la misma.*

*Las personas que se encuentren inmersas en estas excepciones deberán acreditarlo documentadamente. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas y/o los agentes de control de tránsito están facultados para exigir la documentación que acredite encontrarse en una actividad exceptuada a toda persona que circule en el horario de toque de queda”.*

Finalmente, el artículo 2 del referido Decreto Ejecutivo señala que el “estado de excepción tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días”.

Los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que han sido suspendidos por el Decreto Ejecutivo Nro. 588 son aquellos contenidos en las siguientes disposiciones: artículo 12; artículo 17; artículo 21, y; artículo 22, numerales 1 y 2.

Por lo expuesto y en cumplimiento del numeral 4, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Misión de Permanente de Ecuador solicita respetuosamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas - Oficina de Asuntos Jurídicos- informar a los demás Estados parte acerca de este particular.

La Misión de Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas hace propicia la ocasión para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Oficina de Asuntos Jurídicos- la seguridad de su consideración y estima.

Nueva York, 3 de noviembre de 2022



Anexos: los indicados

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note No. 4-2-137-2022

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and has the honour to inform it that on 1 November 2022, Executive Decree No. 588, the text of which is annexed hereto, was issued, by which the President of the Republic, Guillermo Lasso Mendoza, declared “a state of emergency owing to serious internal unrest in the Provinces of Guayas and Esmeraldas”.

This declaration was issued because of the activities of organized crime groups, whose criminal actions, threats and practices were reflected, with increased violence, in the early hours of 1 November 2022, in events whose escalation puts at risk the safety of citizens and law enforcement officials, their integrity and their lives.

The declaration is limited to the aforementioned territorial area because that is where the events occurred and where the conflict between criminal groups and factions has led to violent acts that undermine the rights of the rest of the population, law enforcement officials and even the participants in the aforementioned clashes. It is also the territorial area where criminal groups and factions have reacted violently and disproportionately to the State's strategic intervention.

The situation described above requires urgent intervention by State institutions to safeguard security and protect the rights of citizens, public order and social peace.

Under article 6, "the right to freedom of association and assembly is suspended in the territorial area defined in [the aforementioned] Executive Decree of, strictly in relation to the reasons for the state of emergency, provided that the principles of proportionality, necessity and appropriateness, and the other rights protected under the Constitution, are fully respected. The right to freedom of association and assembly is suspended to limit the spread of violent actions such as those that gave rise to the state of emergency. In that regard, law enforcement officials are authorized to prevent and break up meetings in public spaces where possible threats to public order and civilian safety have been identified".

Similarly, under article 7, "the right to inviolability of the home is suspended in the territorial area defined in the Executive Decree. The suspension of the right to inviolability of the home will permit the conduct of inspections and searches by law enforcement officials in order to find caches of controlled substances, weapons and explosives to eliminate ongoing or future threats. This exceptional measure is necessary to prevent possible attacks and violent acts resulting from confrontations between organized crime groups".

Under article 8, "the right to the inviolability of correspondence sent or received is suspended in the territorial area defined in the Executive Decree. The suspension of the right to the inviolability of correspondence shall be limited to the identification, analysis and collection of messages whose purpose is the commission or concealment of unlawful acts related to the events that gave rise to this declaration, in particular those that are related to possible attacks that put the integrity and life of citizens at risk".

Under article 10, "freedom of movement shall be restricted as from the issuance of the Executive Decree. The restrictions shall be in effect every day from 9.00 p.m. to 5.00 a.m. in the territorial area defined in the Executive Decree. Anyone moving around during the curfew shall be brought before the competent judicial authorities. Notwithstanding the foregoing, the following sectors are exempted from the restrictions established herein:

1. Services in the comprehensive public health network and the complementary private network;
2. Security and law enforcement, complementary private security and risk management and emergency services;
3. Emergency road services;
4. Public servants of the Offices of the President and Vice-President of the Republic, the Ministry of Government, the Ministry of Defence, the Ministry of the Interior, the National Secretariat of Public and State Security and the diplomatic corps accredited to the country;
5. Public servants or the personnel of contractors of public agencies who can prove that they must travel to ensure the continuity of public services;
6. Persons who are part of a logistic chain, including the export sector, who must prove that they belong to a company whose ordinary business activity requires the transportation of cargo and, if applicable, that the cargo being transported is legitimate; similarly, companies whose factories or production facilities operate during the night or in rotating shifts and their employees, who must prove their status with a pass or identification card issued by their employer;
7. Persons who must travel to and from airports for flights scheduled during curfew hours;
8. Lawyers, as long as they can prove the need to attend a judicial proceeding, officials of the Constitutional Court and public servants of the judiciary;
9. Personnel of the mass media;
10. Workers in the strategic sectors and public services defined as such in the Constitution, namely energy in all its forms; telecommunications; non-renewable natural resources; transportation and the refining of hydrocarbons; biodiversity and genetic heritage; the radio-frequency spectrum; water; provision of public drinking water and

irrigation services; sanitation; electricity; telecommunications (as a public service); roads; port and airport infrastructure; and others provided for by the Law;

Persons who in the exercise of their economic activities supply a production chain. For this purpose, the Ministry of Government may issue specific provisions. The Ministry of Government may, subject to a prior assessment, authorize the holding of activities such as public events, touristic and similar activities in places where there is no risk of violence.

Persons who are closely involved in these exceptions must so prove with documentation. The national police, the armed forces and/or traffic police are authorized to demand documentation proving engagement in an exempted activity from any person moving around during curfew hours”.

Lastly, under article 2 of the aforementioned Executive Decree, “the state of emergency shall be in effect for 45 days”.

The rights enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights that are suspended under Executive Decree No. 588 are those contained in article 12; article 17; article 21; and article 22, paragraphs 1 and 2.

In view of the above and in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Permanent Mission of Ecuador respectfully requests that the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, inform all the States parties to the Covenant accordingly.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 3 November 2022

Annexes: As indicated.

\*\*\*

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note n° 4-2-137-2022

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de l'informer de la promulgation du décret exécutif n° 588, en date du 1<sup>er</sup> novembre 2022, dont le texte est joint en annexe, par lequel le Président de la République de l'Équateur, Guillermo Lasso Mendoza, a déclaré l'état d'exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les provinces de Guayas et d'Esmeraldas.

L'état d'exception est décrété en raison des agissements de groupes relevant de la criminalité organisée, dont les actes, menaces et pratiques criminels se sont manifestés avec une violence particulière le 1<sup>er</sup> novembre 2022 aux premières heures du jour, et dont l'escalade met en danger la sécurité des citoyens et des forces de l'ordre, leur intégrité et leur vie.

L'application dudit état d'exception est circonscrite au secteur territorial susvisé, où se sont produits les faits en question et où le conflit entre groupes et factions criminels a conduit à des actes de violence portant atteinte aux droits du reste de la population, des membres des forces de l'ordre et des parties elles-mêmes aux affrontements susmentionnés, et où les groupes et factions criminels ont réagi de manière violente et disproportionnée à l'intervention stratégique de l'État.

Cette situation appelle de la part des institutions de l'État une nouvelle intervention urgente visant à préserver la sécurité et garantir les droits des citoyens, l'ordre public et la paix sociale.

L'article 6 du Décret exécutif suspend l'exercice du droit à la liberté d'association et de réunion dans le secteur territorial visé, pour les seuls motifs qui justifient l'état d'exception, conformément aux principes de proportionnalité, de nécessité et d'adéquation et dans le strict respect des autres garanties constitutionnelles. La suspension du droit à la liberté d'association et de réunion a pour objet de limiter la propagation d'actes de violence tels que ceux qui ont donné lieu à l'état d'exception. À cet égard, les forces de l'ordre sont habilitées à interdire et à interrompre les réunions dans la sphère publique, là où des menaces potentielles à l'ordre et à la sécurité publics auront été détectées.

De même, l'article 7 suspend le droit à l'inviolabilité du domicile dans le secteur territorial visé par le Décret exécutif. La suspension du droit à l'inviolabilité du domicile habilite les forces de l'ordre à procéder à des fouilles et à des perquisitions pour mettre au jour des caches de substances réglementées, d'armes et d'explosifs, dans le but de contrer des menaces actuelles ou futures. Cette mesure d'exception est nécessaire pour prévenir d'éventuels attentats et actes de violence résultant d'affrontements entre groupes criminels organisés.

L'article 8 suspend le droit à l'inviolabilité de la correspondance envoyée ou reçue dans le secteur territorial visé par le Décret exécutif. La suspension du droit à l'inviolabilité de la correspondance s'entend uniquement de la mise au jour, de l'analyse et de la collecte de messages visant à la perpétration ou à la dissimulation de tout acte illicite en rapport avec les événements ayant donné lieu à la déclaration de l'état d'exception, en particulier avec d'éventuels attentats de nature à porter atteinte à l'intégrité et à la vie des citoyens.

L'article 10 restreint la liberté de circulation à compter de la date de publication du Décret exécutif, de 21 heures à 5 heures tous les jours dans le secteur territorial visé par le décret. Les personnes circulant durant les heures de couvre-feu seront transférées auprès de l'autorité judiciaire compétente. Nonobstant ce qui précède, sont exemptés de la mesure susvisée :

1. Les services de santé du réseau global de santé publique et du réseau privé complémentaire ;
2. Les services de sécurité et les forces de l'ordre, les services de sécurité privés complémentaires et les services de gestion des risques et d'intervention d'urgence ;
3. Les services de secours routier ;
4. Les fonctionnaires de la Présidence de la République, de la Vice-Présidence de la République, du Ministère des affaires du gouvernement, du Ministère de la défense nationale, du Ministère de l'intérieur, du Secrétariat national de la sûreté publique et de l'Etat et du corps diplomatique accrédité dans le pays ;
5. Les fonctionnaires ou les sous-contractants des entités publiques pouvant justifier la nécessité de se déplacer pour assurer la continuité des services publics ;
6. Les personnes affectées à une chaîne logistique, y compris le secteur de l'exportation, qui devront certifier qu'elles travaillent pour une entreprise dont l'activité ordinaire nécessite le transport de marchandises et attester, le cas échéant, de la légalité des marchandises qu'elles transportent, ainsi que les entreprises dont les usines ou les installations de production fonctionnent la nuit ou par équipes tournantes, et dont les employés devront attester de leur statut moyennant carte d'identification délivrée par leur employeur ;
7. Les personnes devant se déplacer vers et depuis des aéroports en cas de vols se déroulant durant les heures de couvre-feu ;
8. Les avocats, à condition de justifier la nécessité de prendre part à une procédure judiciaire, les fonctionnaires de la Cour constitutionnelle et les fonctionnaires de l'administration judiciaire ;
9. Les professionnels des médias ;
10. Les travailleurs des secteurs stratégiques et des services publics définis comme tels dans la Constitution, soit : l'énergie sous toutes ses formes, les télécommunications, les ressources naturelles non renouvelables, le transport et le raffinage des hydrocarbures, la biodiversité et le patrimoine génétique, le spectre radioélectrique, l'eau, la fourniture de services publics d'eau potable et d'irrigation, l'assainissement, l'électricité, les télécommunications (en tant que service public), les routes, les infrastructures portuaires et aéroportuaires et autres secteurs définis par la loi ;

Les personnes qui, dans l'exercice de leurs activités économiques, approvisionnent une chaîne de production.

Le Ministère des affaires du gouvernement est habilité à publier les dispositions pertinentes à cette fin. Il peut autoriser la tenue d'activités telles que manifestations publiques, activités touristiques et autres activités analogues dans des lieux ne présentant pas de risque de violence, après évaluation des conditions y relatives.

Les personnes visées par ces exemptions devront prouver, documents à l'appui, qu'elles y ont droit. La police nationale, les forces armées ou les agents de la circulation sont habilités à exiger de toute personne circulant durant les heures de couvre-feu des documents prouvant qu'elle exerce une activité visée par cette exemption.

Enfin, en application de l'article 2 du décret, l'état d'exception est en vigueur pendant quarante-cinq jours.

Les droits inscrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ont été suspendus par le Décret exécutif n° 588 sont les droits visés aux articles 12, 17 et 21 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 22.

Au vu de ce qui précède, et en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Équateur prie donc respectueusement le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation de bien vouloir informer tous les autres États qui sont parties au Pacte de la mesure susmentionnée.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 3 novembre 2022

Annexes : documents indiqués

\*\*\*